

Introducción Editorial

ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LOS 80

ES obligado iniciar estas primeras páginas de «Papeles de Economía Española» con el testimonio de agradecimiento de quienes los hacemos a quienes han empezado a leerlos. Agradecimiento, ante todo, por haber agotado en muy pocos días la copiosa y poco habitual edición del primer número de la revista, por haber sobrepasado en mes y medio todas las previsiones imaginables en cuanto al número de suscripciones, por haber obligado a realizar una segunda edición, empresa a la que nos resistíamos por creer difícil que el mercado la absorbiera y de la que en veinte días nos hemos quedado sin ejemplares. Si de cualquier publicación puede afirmarse que vale lo que valgan los lectores que la siguen, hemos de consignar con satisfacción que nuestro esfuerzo ha merecido la pena y que no nos equivocamos cuando nos decidimos a lanzar una revista que tratase de difundir las opiniones sobre los problemas de la economía española de quienes quisieran comprometerlas libre y responsablemente.

UN CAPITULO DE GRACIAS

En la realización de este proyecto trataremos de perseverar (un verbo que tan difícil nos resulta conjugar a quienes vivimos en este país). Perseverancia que no alegamos en vano, pues contamos para conseguirla con dos avales. Primero y principal, a los que hacemos «Papeles de Economía Española» nos gusta hacerlos y, segundo, pensamos que la perseverancia sirve, no sólo a nuestro gusto, sino también a nuestra conveniencia, pues es sólo con la dedicación constante de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo como podremos aumentar y consolidar el ya crecido número de nuestros lectores.

Resulta, sin embargo, imposible, cumplir esa promesa dirigida al «mercado» de nuestro producto, sin contar con los colaboradores que secundan el proyecto editorial. Y con estos colaboradores hemos contado. Puede repasarse el sumario del número 1 para probar hasta qué punto han estado presentes los economistas y técnicos de distintas generaciones, ideologías y especialidades. Cuantos hemos convocado para que nos dieran sus opiniones han respondido. Creemos que este esfuerzo común de 33 colaboradores en dar respuesta al tema de la crisis económica para el que se les convocó, merece el agradecimiento de los editores de la revista, porque son estas respuestas solventes a la crisis económica las que nos han ganado la atención del público y la fidelidad de su demanda.

Un proyecto editorial como el de «Papeles de Economía Española» necesita difundir las principales conclusiones de los distintos trabajos so-

bre los diversos problemas, a las que llegan los colaboradores de cada número, porque nuestro propósito no es sólo explicar el comportamiento del mundo económico español, sino el más ambicioso de contribuir a cambiarlo. Y esta difícil empresa necesita de la difusión de las ideas que tengan ese propósito. Hace muchos años, un economista español —Francisco Bernis— afirmaba que la mejora en la administración de los recursos escasos de cualquier sociedad no podría conseguirse sin crear una amplia conciencia colectiva sobre nuestros principales problemas y de sus posibles soluciones. Y que la deficiencia de la gestión económica española estaba más en la corta y limitada conciencia del público de nuestros males y de sus remedios, que en la inexistencia de diagnósticos técnicos acertados y competentes sobre los problemas básicos del país. Era esa ignorancia general, la falta de un conocimiento aceptable de la economía española por quienes la interpretaban, los que perpetuaban —y creemos que perpetúan— nuestros problemas. Una buena administración económica —concluía Bernis— «es obra de todos, no un proyecto luminoso de unos pocos». Si las cosas se entienden así, se explica que tengamos que agradecer también la generosa acogida que la prensa y los restantes medios de difusión han ofrecido de muchas de las ideas contenidas en el primer número de «Papeles de Economía Española». Confiamos en que ese apoyo continúe y, por nuestra parte, trataremos de merecerlo y facilitararlo.

**EL CONTENIDO
DEL NUMERO 2
DE «PAPELES»:
SUS CUATRO
SECCIONES**

Hemos hecho hasta aquí lo obligado y lo fácil: dar las gracias. Menos fácil, pero no menos obligado, es lo que nos queda por hacer: contar al lector lo que pretenden las páginas que siguen a esta introducción editorial y que componen el número 2 de «Papeles de Economía Española».

Anticipemos que se trata de un número variado, que recoge trabajos con propósitos muy diversos y que apunta la estructura a la que tratarán de responder nuestros «Papeles» en el futuro. Cuatro son las secciones que dividen el sumario:

- Una **primera sección** que, bajo el título de «Opiniones», aspira a presentar con brevedad juicios sobre problemas económicos españoles y respuestas operativas y comprometidas a los mismos. «Cuatro opiniones sobre la crisis económica española» son las que comparecen en este número, dando contenido a esa Sección.
- Una **segunda sección**, bajo el título de «Colaboraciones», recogerá los artículos escritos expresamente para «Papeles» y las conclusiones a las que lleguen las investigaciones realizadas para el Fondo de Investigación Económica y Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Esta sección de la revista ofrece en este número un núcleo numeroso de colaboraciones: diez en total. Dos de ellas parten de la realización previa de unas encuestas de opinión cuyo contenido nos parece de vital importancia para decidir la situación de una economía y los matices de sus problemas. Bajo el título «Orden social, clase obrera y conciencia de clase: Política y Economía», el profesor Víc-

tor Pérez Díaz examina las opiniones, las actitudes y las conductas de los obreros industriales españoles con relación al sistema político y económico vigente, tal y como éstas se reflejan en una encuesta entre 4.200 asalariados del sector industrial. El segundo grupo de agentes encuestados son los consumidores y los empresarios ante la crisis económica. Encuestas que el Fondo de Investigación Económica y Social realiza periódicamente bajo la dirección de sus colaboradores Francisco Alvira y José García López. Los cuatro trabajos siguientes tienen una referencia a aspectos fundamentales de la «crisis de los 70» que han heredado y están ya padeciendo los 80. Su factor más espectacular y conocido —el mercado de crudos de petróleo— se analiza por Roberto Centeno; su signo externo más claro —las modificaciones en nuestra relación real de intercambio— tratan de estimarse en el estudio de Julio Alcaide, y los efectos de la crisis sobre los precios de los servicios del turismo que están afectando de forma ostensible a su demanda, se calculan a través de un nuevo índice, cuya elaboración ha propuesto y cuya confección dirige para el FIES, el economista y estadístico José Largo Jimenez. «Economía Española 80», escrito por el Equipo de Coyuntura Económica que dirige el profesor Fuentes Quintana, e integran los profesores Lagares Calvo y Raymond Bará y los economistas Julio Alcaide Inchausti, José García López y Miguel Valle Garagorri, constituye la cuarta colaboración que analiza los efectos de la crisis sobre nuestra vida económica, cifrándolos, con la mayor aproximación posible en el primer año de la década que hemos iniciado. A esos cuatro trabajos les sigue el confeccionado por Juan Junquera, quien aborda un tema muy diferente, de tanta importancia como actualidad, como son los problemas de la burocracia y el funcionariado en la CEE y en España, trabajo en el que se ha utilizado parte de las conclusiones de un estudio más amplio del autor realizado para el Fondo de Investigación Económica y Social. Los tres artículos que completan la sección de colaboraciones tienen una misma referencia temática: las Cajas de Ahorro. Juan José Toribio refiere las líneas seguidas en su proceso de reforma situándola dentro de la liberalización del sistema financiero, Jorge Juan Pereira estudia el mismo problema, pero visto desde la perspectiva de la conducta efectiva seguida por las Cajas de Ahorros tras de las medidas de liberalización, finalmente José María García Alonso expone los principios a los que ha obedecido la reciente ordenación de la expansión de oficinas de las Cajas de Ahorros.

- La **tercera sección**, bajo el título «Problemas Económicos de las Comunidades Autónomas» pretende presentar en cada número de «Papeles» un estudio referido a una Comunidad Autónoma o a parte de ella. Esos estudios, que serán realizados especialmente para nuestra revista, comienzan en este número con la publicación del trabajo de Francisco Bono y José Higuera «La Economía Aragonesa».
- La **cuarta sección** de «Papeles» aspira a recoger, como ya afirmábamos en el primer número, las que estimamos ideas económicas fundamentales, expuestas por los economistas más destacados de ayer y

de hoy. Esta cuarta sección incluye en este número el trabajo de un economista español, tan estimado por toda la profesión como es Luis Angel Rojo, quien expone un tema que no dudamos en calificar de gran interés: «Keynes y los problemas de hoy».

Tal es, presentado en pocas palabras, el contenido del número 2 de «Papeles de Economía Española». Un contenido del que sus editores nos sentimos muy satisfechos porque creemos que nuestros colaboradores han logrado responder al propósito fundamental de la revista: ofrecer a los lectores opiniones operativas, comprometidas y responsables, y proposiciones e interpretaciones solventes de la realidad económica española. Opiniones e interpretaciones necesarias para adoptar elecciones y decisiones económicas. Creemos también que esas aportaciones están orientadas —respondiendo a uno de nuestros propósitos editoriales— en la dirección justa de defender los intereses generales y están expuestas manifestando y no ocultando las valoraciones de las que parten.

Es difícil resistir la tentación de comentar a los lectores el contenido de muchas de las interesantes afirmaciones que están contenidas en las páginas siguientes a esta introducción editorial.

Un comentario que ni pretende suplantar a los más interesantes que, sin duda, suscitarán de nuestros lectores, ni mucho menos juzgar o estimar anticipadamente el «producto» que les ofrecemos. Nuestro propósito es doble. Primero, el de exponer los motivos que teníamos al solicitar los trabajos que la revista publica y el segundo, el de rendir a nuestros colaboradores el tributo que un autor más estima: la atenta lectura de las ideas que pretende difundir y el testimonio de esa ocupación de nuestro tiempo y nuestro trabajo, glosando sus aportaciones.

**CUATRO
OPINIONES SOBRE
LA CRISIS
ECONOMICA
ESPAÑOLA**

¿Cómo se ve desde las distintas ideologías políticas, por economistas profesionales, la crisis que cumple en este 1980 su séptimo año? Esa fue la pregunta que dirigimos a cinco economistas elegidos entre los pertenecientes a los cuatro grandes partidos nacionales: UCD, PSOE, PC y CD. Y son sus respuestas las que abren el contenido de este número.

Nos importa destacar que los economistas que elegimos no se seleccionaron con arbitrariedad. Tratamos de que en ellos coincidieran dos características: su acusada profesionalidad y la presencia y vigencia de sus opiniones en los diferentes partidos. Para quienes nos lean y sean economistas bastará dar sus nombres para justificar la elección. Para quienes nos lean y no pertenezcan a la profesión hay que añadir pocas —muy pocas— palabras más. El economista elegido por UCD es el Ministro de Economía, José Luis Leal. Parece obvio que si UCD está aplicando el Programa Económico del Gobierno que responde, como se ha reiterado una y otra vez, al programa electoral del partido, fuera precisamente quien dirige hoy el Ministerio de Economía, el economista que expusiera los sentidos en el que el Programa Económico del Gobierno ofrece las respuestas posibles a la crisis y la forma en la que el Go-

bierno está tratando de incorporarlas a la política económica de cada día. Enrique Barón y Santiago Roldán dan cuenta de la respuesta socialista a la crisis que obviamente está informada por el documento que la define con detalle: «Estrategia Económica Socialista». Documento elaborado por un grupo numeroso de economistas del PSOE y en el que Enrique Barón y Santiago Roldán tuvieron una participación importante. Julio Segura, responsable de economía del Comité Central del Partido Comunista, presenta los cambios necesarios frente a la crisis desde esa perspectiva ideológica. Guillermo Piera ofrece, en fin, los aspectos de la crisis económica desde lo que él mismo denomina el «pensamiento de la derecha progresista». Aunque el autor no forma parte en la actualidad de los órganos de dirección del partido de AP, resulta claro que ha sido —y sigue siendo— hasta hoy uno de sus economistas más destacados y el que con más frecuencia ha propugnado y defendido soluciones económicas desde esa postura ideológica.

Las respuestas a la crisis dadas por economistas desde diferentes partidos políticos tienen que tener las diversidades que se siguen de su muy distinta forma de entender el Estado, la Sociedad, las formas de producción y los modos de vida. Sin embargo, cuando esas cuatro respuestas a la crisis se leen atentamente, se comprueba hasta qué punto la tiranía de los hechos de la crisis y la enorme fuerza de los factores que la definen se reconoce por los cinco economistas que con ella se enfrentan. Es sobre estas coincidencias sobre las que desearíamos centrar nuestra atención, pues estas bases de acuerdo deberían permitir que la sociedad española cerrase los oídos a los arbitristas, a los interesados y a los irresponsables que con tanta frecuencia propugnan fáciles y demagógicas soluciones indoloras a la crisis, que ningún economista solvente —cualquiera que sea su ideología— puede avalar.

Seis son, al menos, las coincidencias básicas en la contemplación de la crisis por los cinco economistas que nos dan sus opiniones:

- El reconocimiento de su gravedad, de sus importantes condicionamientos internacionales y de su trascendencia económica y política. La crisis presente es, para todos los economistas que sobre ella opinan en este número de «Papeles», mucho más que una consecuencia de la sin duda importante elevación del precio de la energía. El aumento de los precios de la energía, las materias primas y los productos agroalimentarios ha estado y está detrás de la crisis actual produciendo, no sólo una mayor inflación por sus efectos directos, sino, sobre todo, por estimular crecimientos de otros muchos precios y de casi todas las rentas, revolucionando así los costes y precios relativos. A partir de esta nueva situación han aparecido en el mercado mundial países y productos que reclaman, desde la sólida posición de sus mejores costes, unas cuotas crecientes del mercado. Se originan a partir de aquí dos graves problemas: una difícil situación exterior, pues las balanzas de pagos sufren el encarecimiento de las importaciones y de la competencia por colocar las exportaciones con los nuevos países; por otra parte, el exceso de capacidad asola a instalaciones industriales enteras incapaces de competir y producir, en consecuencia, a los pre-

cios vigentes. La caída en la producción, la renta y el empleo, es inevitable, lo que agudiza más aún la situación de crisis. La extensión de esta secuencia de acontecimientos y su carácter acumulativo conceden a sus consecuencias —inflación de una parte, estancamiento de otra— una indiscutible trascendencia social y política.

- Ni uno solo de los economistas que opinan para nuestros lectores deja de reconocer expresamente el origen y el proceso de propagación de la crisis. Esta se halla en el lado de la oferta y los costes. No en el de la demanda. La política económica frente a la crisis reclama un profundo reajuste de la oferta productiva y una reducción de sus costes. La estructura de la producción heredada del pasado debe variarse y las fuerzas que presionan sobre los costes, moderarse. Esto significa que las medidas eficaces para tratar la crisis son laboriosas, reclaman la aplicación de programas sectoriales de reconversión productiva y de estímulo de determinadas producciones cuidadosamente elaborados y pacientemente aplicados. De otra parte pide una actuación eficiente para reducir costes de producción y precios, ganando de esta manera competitividad para la oferta de nuestros productos, lo que a su vez reclama un reparto cuidadoso de esfuerzos y sacrificios entre los distintos grupos sociales. Animar el gasto nacional por fáciles medidas de aliento monetario y/o fiscal sin más, no hará otra cosa que hundirnos en la crisis. Equivaldría a una huida hacia adelante frente a los problemas, de la que habría que regresar muy pronto con enorme coste para todos.
- Los programas de reestructuración de la oferta necesitan un aumento de las inversiones. La asignación de recursos hacia una mayor inversión se considera también imprescindible por todos los economistas consultados.
- La máxima economía del gasto público en todo el sector de Administraciones Públicas, la nueva financiación de la Seguridad Social, una limitación del desequilibrio presupuestario del Sector Público y una reforma en la conducta que hasta ahora se ha seguido en la empresa pública, constituyen otras tantas afirmaciones en las que la coincidencia de las opiniones es general.
- La búsqueda de otros mecanismos distintos de redistribución de la renta al intensamente utilizado y perturbador de la presión de los salarios parece necesaria y urgente, coincidencia que se destaca en una lectura de las cuatro opiniones sobre la crisis.
- También parece advertirse una coincidencia general en las reformas de nuestras instituciones económicas. Ni el sistema financiero, ni el fiscal, ni los gastos públicos, ni la regulación de la empresa pública, ni la de la Seguridad Social, parecen satisfacer a ninguno de nuestros consultados. Recorrer el campo de las reformas del sistema económico resulta imprescindible para aplicar una política eficiente con la que dar respuesta a la crisis.

Las principales conclusiones hacia las que llevan estas coincidencias son,

al menos, tres: evitar el simplismo en los planteamientos de la crisis y la facilidad en las soluciones. La crisis es compleja, con extenso arraigo internacional y con laboriosa y programada respuesta; la reestructuración sectorial o el reajuste productivo deben de estar en la vanguardia de las respuestas a la crisis; las reformas institucionales forman parte también de las medidas frente a la crisis, pues no son —pese a la apariencia— decisiones distantes o indiferentes a los factores que la producen, sino reformas vitales para conseguir una sociedad económica eficiente, fundamento necesario de cualquier política realista y constructiva frente a la crisis económica.

Esta suma de coincidencias no pueden hacernos olvidar las diferencias que en las respuestas a la crisis nos ofrecen los cinco economistas cuyas opiniones publicamos, diferencias que, obviamente, arraigan en las muy distintas valoraciones políticas de las que esas opiniones parten. Las diferencias más ostensibles se registran en el acento que sobre los objetivos de la distribución equitativa de la renta y la riqueza y el empleo colocan los partidos de izquierda y en la importancia y prioridad concedidas a la eficacia, la libertad económica y a una mayor estabilidad de precios y de intercambios con el exterior por los partidos de centro y derecha. Las diferencias también son visibles obviamente en el protagonismo del sector público (izquierda) o en el empresario y el mercado (centro y derecha).

Las discrepancias de opinión existentes en la izquierda se sitúan en la mayor atención que los comunistas conceden a la reestructuración de la oferta y a la anulación del margen diferencial de la crisis española como preocupaciones dominantes de la política económica y la mayor polarización de los socialistas sobre la potenciación de los Sindicatos y la validez del Acuerdo Marco, y la vuelta a la planificación que los socialistas denominan concertada.

Las diferencias en las opiniones del centro y la derecha existen también. Bajo un principio de acuerdo a la generalización de la economía de mercado, como fuente de inspiración básica de las decisiones de política económica de centro y derecha, la defensa de la necesidad del proceso de reformas en las instituciones económicas y, muy especialmente, las del sistema fiscal —sobre todo— y las del financiero, diferencian las posiciones de UCD y de CD.

Todas estas diferencias están en línea con lo que cabía esperar. Son coherentes con la diversidad de puntos de partida. Más sorprendentes son, sin embargo, las coincidencias en el diagnóstico de la crisis y en la prioridad concedida a determinadas medidas para afrontarla (reajuste de líneas de producción, reducción de costes, reformas institucionales). Estas importantes coincidencias en la aproximación a la crisis deben informar las elecciones y decisiones de la sociedad. Y es en esa traducción operativa en la que se advierten las deficiencias más importantes en la política económica española. En efecto, si nuestra crisis se enfoca, según parece correcto, como una crisis de oferta que exige importantes reajustes productivos, cabría preguntar ¿cuántos programas competitivos existen que ofrezcan a los ciudadanos una exposición clara de cómo

ordenar —con cifras y con fechas— el sector siderúrgico, el naval o la industria textil, o la construcción de viviendas? Una respuesta quizá exigente, pero responsable, sería la de contestar que ninguno. Si el aumento de las inversiones constituye una necesidad ineludible para conseguir esos reajustes productivos ¿de qué programas se dispone que nos indiquen cómo debe comportarse la inversión pública en éste y en los años inmediatos y cómo estimular la inversión privada?

La carencia de programas de inversión pública es uno de los datos más alarmantes de la actual política económica española, al igual que la articulación de unas medidas de estímulo para la inversión privada. Si las reformas institucionales (fiscal, financiera, del gasto y de la empresa pública, de la seguridad social, del cuadro que condiciona las relaciones industriales) deben formar parte de un tratamiento de la crisis ¿de qué balances dispone el ciudadano español sobre la situación de las reformas en esos campos y de qué proyectos sobre el calendario y la dirección de los cambios futuros? Ciertamente aquí no bastan las afirmaciones generales, aunque sean correctas, sino su traducción detallada en medidas concretas, y es evidente que con estas condiciones no hay respuesta a la pregunta anterior.

Dicho en menos palabras, a la política económica española le falta diligencia para traducir en decisiones lo que son coincidencias de todos. Una gran pereza política y administrativa en la adopción de las decisiones económicas parece invadir el país. Faltan en primer lugar, proyectos y falta ilusión para formularlos. La crisis económica no recibe de la política ni siquiera las respuestas aceptables por las distintas ideologías. Pero, además, falta también la continuidad en la atención de la política por los problemas económicos. A unos días de febril dedicación, siguen meses enteros de atonía. Parece como si los escenarios políticos cambiantes de cada día absorbieran toda la capacidad de atención y el tiempo disponible por el Gobierno y la oposición, con el resultado de la aparición y tratamiento intermitente y fragmentario de los problemas económicos. Las excepciones dilatorias a los problemas económicos los complican y los agravan siempre. Los dos años y medio de retraso en el tratamiento de la situación económica pagados por la atención prioritaria a los problemas de la transición política agravaron hasta límites sin precedentes los desequilibrios económicos producidos con el comienzo de la crisis en 1973-74. El proceso electoral de marzo del 79 desplazó la atención del problema económico, no se aprobó el presupuesto a tiempo, se descuidó la gestión diaria de la política económica haciendo necesarias costosas medidas posteriores de reajuste. Un año después, la puesta en marcha del proceso autonómico ha vuelto a monopolizar la atención de los políticos. A lo largo de los 7 años de la crisis —con la excepción de la etapa julio 1977/diciembre 1978— siempre ha existido un tema y un motivo político para no ocuparse de la economía. Es seguro que esta situación no va a continuar en el futuro inmediato, pues la gravedad de los hechos económicos los van a adelantar a la atención de los políticos. Sería deseable que en esta circunstancia la atención hacia la economía no fuera pasajera, que la economía ganara la atención

continuada y diligente de los políticos y de la Administración, porque sólo así, esas medidas en las que existe amplio acuerdo en aplicar para el tratamiento de la crisis pasarían de las opiniones a informar la orientación de la marcha de los procesos económicos en la realidad.

La atención hacia los temas económicos españoles —se afirmaba antes— tiene que llegar pronto. Las bases obvias de este fácil pronóstico están en el agravamiento de la economía hasta el límite de la situación de emergencia con la que se ha iniciado esta nueva década de los 80. Varias de las colaboraciones contenidas en este número de «Papeles» refieren con detalle la complicada y difícil situación por la que atravesamos:

- La compleja situación energética de cuyos problemas es heraldo permanente el mercado de crudos petrolíferos.
- Las variaciones experimentadas en la relación real de intercambio que constituyen el registro más fiel de la crisis.
- La caída de las expectativas de consumidores y empresarios en correspondencia con las variaciones adversas de los mayores precios internacionales y de la desfavorable marcha de la relación real de intercambio.
- Los efectos que sobre precios y balanza de pagos ocasiona la crisis, afectando de forma transcendental a las posibilidades exportadoras de los diversos países.
- Los efectos generales sobre la economía en sus principales frentes: balanza de pagos, precios de consumo, crecimiento económico y nivel de paro.

Un especialista tan competente y conocido como Roberto Centeno es el que analiza en este número la configuración que presenta el mercado de crudos al comenzar el año 1980. Sobre varias cuestiones de las planteadas por Roberto Centeno desearíamos llamar la atención de nuestros lectores. La primera de ellas es la importancia que concede a un hecho que los meses transcurridos del año 1980 han ido atribuyendo un papel cada vez más destacado. Nos referimos a la desviación de la estrategia de los países productores de crudos, desde el objetivo de mayores ingresos por medio de mayores precios y de mayores producciones hacia un objetivo más realista de garantizar ingresos reales y estabilizar las producciones, para que aquéllos duren el mayor tiempo posible. De este comportamiento se sigue inexorablemente una disociación cada vez más profunda y explícita entre los intereses de los países productores y los países consumidores, que provoca una perspectiva de futuro calificada de, al menos, inquietante.

El tema de la duplicidad de los efectos de los encarecimientos del petróleo sobre una economía nacional se estudia por Roberto Centeno tratando de estimar sus impactos inflacionistas y deflacionistas. La infla-

LA NUEVA DECADA DE LOS OCHENTA: LOS HECHOS ECONOMICOS DE LOS PRIMEROS MESES

ción con estancamiento, convertida en el mal omnipresente de la crisis actual encuentra una parte importante de su explicación en las variaciones de los precios del petróleo. La estimación que ofrece el trabajo de Roberto Centeno es que los precios del petróleo son responsables hoy del 25 al 50 por 100 de la inflación a nivel mundial. Asimismo, se señala el efecto contractivo que sobre la actividad de Occidente ha de tener la saturación en la capacidad de gasto de los países productores, que han originado unos excedentes de 50 mil millones de dólares el año pasado. Partiendo de las estimaciones de la OCDE este efecto contractivo se estima en un 3,5 por 100 en los países de la OCDE.

La vigencia de la suma de males en que se manifiesta la crisis petrolífera, recesión más inflación, va a continuar prevaleciendo desgraciadamente en los meses inmediatos de la década que acabamos de iniciar. Esa suma adquiere especial gravedad y dramatismo no tanto para los grandes países industrializados, sino para los de nivel de intermedio desarrollo como España y más aún para los que están en vías de desarrollo a los que plantea el inquietante tema de las transferencias necesarias para pagar sus importaciones y su deuda acumulada.

En cualquier caso, lo que hoy muchos economistas denominan OPEP II está ya presente en la estructura de precios internacionales y ha comenzado a revolucionar los costes y las rentas siguiendo una secuencia tan conocida como fatídica para todas las economías nacionales. El frío registro estadístico de esta crisis se recoge en las variaciones de la relación real de intercambio, esto es, en las relaciones de precios y de importación y exportación de cada país. La estimación de la relación real de intercambio en España que se contiene en el trabajo de Julio Alcaide que publicamos en este número de «Papeles» nos indica hasta qué punto la crisis económica internacional ha tratado duramente a nuestra economía. La OPEP I llevó la relación real de intercambio en el primer trimestre de 1977 a una pérdida del orden del 26 por 100 respecto de su nivel antes del comienzo de la crisis (1973). La estabilidad del mercado de crudos durante el año excepcional de 1978 permitió ganar un 10,8 por 100 respecto de la situación precedente. Esta recuperación ha desaparecido tras la crisis OPEP II que ha comenzado a vivirse en la última parte de 1979 y que dominará el corriente año. En efecto, el alza del mercado de crudos de mitad del 79 deja situada al final del pasado ejercicio en 20 puntos menos a la relación real de intercambio respecto de sus valores en el 73. Las previsiones para el año 1980 no son ciertamente optimistas, pues se estima con general coincidencia en que el transcurso de este año añadirá al menos una pérdida de 10 puntos a la ya acumulada a finales del pasado año.

El empobrecimiento relativo que para un país comporta la caída de su relación real de intercambio ejerce su influencia en las expectativas de los agentes económicos y en el nivel de los precios.

La situación de las expectativas de los dos agentes económicos fundamentales del proceso económico, consumidores y empresarios, se trata ampliamente en el trabajo realizado por Francisco Alvira y José García

López que presenta los resultados de las encuestas periódicas de opinión efectuadas en el FIES.

La década de los 80 no se inicia ciertamente con optimismo por el consumidor español. Tanto el índice subjetivo de sentimiento del consumidor como el índice objetivo del indicador de malestar ofrecen cifras adversas. El índice de sentimiento del consumidor revela al menos dos hechos que no deberían olvidarse en la interpretación de la crisis y en las respuestas dadas a la misma. El primero de ellos es que la motivación de la caída del índice se halla en cómo el consumidor español contempla y valora la marcha económica del país más bien que en la situación económica en la que particularmente se encuentra. Su pesimismo se justifica en que no cree que los grandes problemas económicos estén siendo tratados con el acierto, la continuidad y la atención que su importancia reclama ni con las medidas eficientes en las que pueda depositarse la confianza de un remedio futuro. Por otra parte, una amplia discrepancia, separa la valoración de la situación personal de los consumidores. Los estratos superiores de rentas se están defendiendo aceptablemente de la crisis y sus expectativas se hallan muy alejadas del nivel en el que se sitúan las de los consumidores de los niveles más bajos de rentas. Sin embargo, unos y otros coinciden en su preocupación por los problemas de la economía del país y en la caída de la valoración de la economía nacional desde mitad de 1978 hasta hoy.

Al analizar los problemas que preocupan más a los consumidores, de nuevo la encuesta más reciente subraya al problema del paro como el dominante, señalándose además que las expectativas de los consumidores prevén su aumento futuro. La inflación se sitúa como segundo problema, diseñándose un claro rebrote de las expectativas alcistas desde la segunda mitad del 79. Un tercer motivo de preocupación de los hogares españoles está en la inseguridad ciudadana cuyo crecimiento constante a lo largo de los últimos años guarda un sospechoso paralelismo con el creciente ascenso del desempleo. Este sentimiento de inseguridad es especialmente acusado en las grandes áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Esos tres problemas están claramente despegados de los restantes que, como el deterioro del medio ambiente y la falta de una adecuada infraestructura urbana aparecen también en el mapa psicológico del consumidor español pero con un nivel de urgencia y gravedad mucho menos acusado.

El deterioro de las expectativas se registra, asimismo, en la encuesta de los empresarios. La tendencia alcista de los costes de las tres partidas fundamentales: la energía y primeras materias, los costes del trabajo y los costes financieros se destacan como rasgos dominantes de la situación que, al coincidir con una débil demanda en muchos mercados, afecta de lleno al nivel de los excedentes empresariales. Sin embargo, la posición de los empresarios dista de responder a una línea de homogeneidad. Existen posiciones muy distintas según los sectores productivos. Los datos de la encuesta no permiten vaticinar un crecimiento de las inversiones para 1980. También resulta interesante repasar la ordenación de las respuestas empresariales respecto de la política económica que se

contienen en el trabajo y que transmiten el ambiente de dificultades y de pesimismo en el que discurre la actividad empresarial.

Esa caída de las expectativas empresariales que recoge la encuesta del FIES está plenamente ratificada por la encuesta realizada por el Ministerio de Industria. En efecto, la tendencia prevista para la producción en el futuro por los empresarios españoles es decreciente desde mitad de 1979 y ese decrecimiento se acentúa en el comienzo del año actual. Es de destacar que esta encuesta ha anticipado fielmente los movimientos del índice de producción industrial, por lo que es de temer que en este ejercicio la producción industrial esté dominada por una clara debilidad.

Un efecto bien conocido de la crisis económica se registra en el frente de los precios cuyo crecimiento generalizado ha afectado al total de los bienes y servicios. De manera especial lo ha hecho en el último año para el turismo cuya demanda se ha resentido por esta situación. Dado que el índice de precios al consumo no es representativo de los precios pagados por los turistas, se encargó por el FIES al estadístico y economista José Largo la elaboración de un índice especial que tratase de medir el impacto de la inflación sobre un sector tan sensible e importante para la economía española como es el turístico. Las principales conclusiones que se desprenden del análisis del índice de precios del turismo tienden a destacar su importancia y su validez actuales. Como prueban las cifras que ofrece el trabajo, resulta claro que si bien hasta 1978 no había grandes discrepancias entre el índice de precios al consumo y el correspondiente al turismo exterior —por lo cual quizá este nuevo índice no era necesario—, en 1979 la situación ha cambiado hasta el punto de que la mayor incidencia inflacionista que se produce sobre la estructura consuntiva del turista pudiera ser la causa principal que explicase el peor ejercicio turístico que se registró el año pasado, así como también las preocupantes perspectivas para el actual.

**«ECONOMIA
ESPAÑOLA 80»**

Con el deseo de comprometer una respuesta que ofrezca al lector una valoración de las perspectivas del año 80 se ha incluido en este número un trabajo colectivo que firma el Equipo de Coyuntura Económica, dirigido por el profesor Fuentes Quintana, e integrado por los profesores Lagares Calvo y Raymond Bará y los economistas Julio Alcaide Inchausti, José García López y Miguel Valle Garagorri.

La pretensión de este análisis es la de concretar —en la medida que lo permite la información parcial y fragmentaria que nos ofrece nuestra estadística— el horizonte económico español para el año 80. Como comprobará el lector —si tiene la paciencia de leer esta colaboración— las cosas no han comenzado bien para España en esta década. La hemos iniciado con un empobrecimiento importante en la relación real de intercambio y ese empobrecimiento va a someter a España —como a otros muchos países— a los shocks que de él se derivan: déficit en la balanza de pagos, más inflación, pesimismo empresarial y crecimiento económico menor, aumento del paro. Esa secuencia de acontecimientos obliga

a conceder a los temas económicos una prioridad continuada por la política del país y a reclamar una conciencia de sus efectos económicos y políticos de todos los ciudadanos para solicitar después el esfuerzo indispensable de toda la población, sin el cual no resultará posible obtener una respuesta responsable y realista frente a la crisis económica.

El trabajo de Juan Junquera que «Papeles» incluye en este número 2 trata de un tema de gran interés y que constituye en parte una aplicación de las conclusiones a las que el autor había llegado merced a una investigación de mayor amplitud y extensión realizada para el FIES. El tema del trabajo es un estudio de la situación comparada de distintas burocracias: las de los países de la CEE a las que se añade la española. Tres son las líneas que con este propósito desarrolla el autor: la dimensión comparada de la burocracia, la de sus niveles de retribución y las consecuencias de la crisis sobre las administraciones europeas.

Por lo que se refiere a la dimensión del funcionariado, resulta interesante destacar que España aparece en una posición relativa no tan desfavorable como pudiera esperarse. Así, la proporción de funcionarios públicos sobre la población activa es en España más baja que en ningún otro país europeo, si bien la fuerza del centralismo aparece aquí representada en su máxima expresión. De las cifras que suministra el artículo, su autor concluye que España padece un deficiente desarrollo administrativo. En sus propias palabras, «aunque la afirmación asombró a muchos y no convenza a demasiados, el número de nuestros funcionarios es insuficiente». Mucho nos tememos que convenza a pocos, si alguno. Este, es sin embargo, un punto que merecería amplia discusión, en particular las insuficiencias que Junquera denuncia en **determinadas** funciones de la Administración Pública.

Otra cuestión de interés, por el continuo debate a que está sometida, es la retribución del funcionario. Según las cifras a que llega Junquera, se registra una dispersión elevada entre países, y una situación del funcionario español francamente desfavorable, si bien no la peor que corresponde a los funcionarios británicos.

Finalmente, el trabajo de Junquera dedica la última parte a analizar el comportamiento de las Administraciones públicas europeas desde que se planteó la crisis económica tras la primera gran elevación del precio de los crudos. En términos generales, parece que puede afirmarse que la burocracia ha frenado su desarrollo —al menos, si se mide por la evolución del número de funcionarios— y ha aumentado su conflictividad. Respecto de este último punto no está claro si ello ha sido respuesta a la fuerte inflación que desde entonces están padeciendo, ya que en muchos casos el funcionario ha mantenido el nivel de su renta real.

LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EN LA CEE Y EN ESPAÑA

**CAJAS DE
AHORROS:
SU PROCESO DE
REFORMA DENTRO
DE LA POLÍTICA
DE LIBERALIZACIÓN
DEL SISTEMA
FINANCIERO**

El sistema financiero español ha de constituir tema de estudio y análisis constante de «Papeles de Economía Española» dado su indudable interés y el proceso de reforma abierto y aún no finalizado en el que el mismo se encuentra. Tres colaboraciones incorpora este número sobre los problemas del sistema financiero y las tres referidas a las Cajas de Ahorros.

En la primera de ellas Juan José Toribio —quien desde la Dirección General de Política Financiera del Ministerio de Economía participó activamente en la orientación del proceso de liberalización del sistema financiero en los meses de julio y agosto de 1977— expone en su trabajo la lógica a la que respondió el proceso de reforma de las Cajas de Ahorros.

En tres ámbitos se analizan los aspectos básicos de la reforma de las Cajas de Ahorros. Desde un punto de vista estructural, la reforma ha reordenado los órganos de gobierno, tratando de adecuarlos a un nuevo contexto político y social, acorde con la actual situación española. Frente a la postura adoptada por la normativa al respecto se han suscitado otras posibilidades y tendencias que tratan de potenciar la participación de otros entes (locales e institucionales) que actuarán en la Administración de las Cajas de Ahorros. Con claridad señala Juan José Toribio cuales pueden ser los riesgos de esta alternativa.

Desde el punto de vista operativo, la equiparación de las Cajas de Ahorros a la banca privada, consecuencia del Real Decreto 2290/1977, ha suscitado una fuerte polémica respecto de su actuación en ámbitos muy concretos, cual es el de descuentos de efectos comerciales. Se han ignorado, sin embargo, otros aspectos, como la financiación de la exportación mediante la creación de un subcoeficiente o el Fondo de Garantía de Depósitos de primera importancia, así como los efectos beneficiosos desde el punto de vista de la realidad económica de la liberalización de los tipos de interés y de la reducción de los coeficientes obligatorios.

Por último, desde el punto de vista de la dimensión, la regionalización de inversiones, la libertad de expansión y la regulación del procedimiento de fusión son los tres temas que aparecen abordados en el trabajo de Juan José Toribio.

A la vista del conjunto de medidas ya adoptadas para situar las Cajas de Ahorros en un contexto financiero nuevo y a salvo las experiencias que vayan poniéndose de manifiesto a través del tiempo en un proceso de rodaje que todavía no puede considerarse finalizado, lo que si se advierte es que la racionalidad económica se decanta hacia posiciones liberales que abran las posibilidades de competencia entre instituciones dedicadas a similares actividades, sin que ello suponga la pérdida de funciones que han sido consideradas tradicionales y queridas por las Cajas de Ahorros.

El trabajo de Jorge Pereira —«El proceso de liberalización del sistema financiero y las Cajas de Ahorros»— trata de realizar una operación de contraste entre la situación de las Cajas de Ahorros antes de la reforma

de 1977 y su situación actual. Para ello analiza las funciones típicas que las Cajas de Ahorros han venido cumpliendo, así como las condiciones en que dichas funciones se han desarrollado. Las características generales del pasivo de las Cajas de Ahorros —elevada importancia relativa, la peculiar estructura de los depósitos y su superior coste financiero unitario en relación con otros intermediarios financieros— no han impedido, a pesar de la transformación operada en el sistema, que las Cajas conservasen su cuota de mercado. Esta cuota se ha mantenido gracias al esfuerzo realizado por las Cajas de Ahorros para dar una respuesta adecuada al desafío que una mayor libertad supone para las mismas. Para mantener sus funciones crediticias tradicionales, de cara a una clientela que se caracteriza fundamentalmente por su bajo potencial económico, las Cajas de Ahorros se han visto enfrentadas, no sólo a los inconvenientes derivados del pasivo, sino también a la grave carga que para ellas supone una inversión institucionalizada superior a la de los otros intermediarios financieros y que habrá de pesar durante un tiempo excesivamente largo sobre sus espaldas antes de llegar a la equiparación plena.

La utilización de los datos estadísticos proporciona al autor una base sólida y fiable para hacer frente a afirmaciones que no se corresponden con la realidad. Así, se ha dicho que el proceso de liberalización ha provocado una reducción en los plazos del crédito. Contrariamente, las cifras muestran que, a nivel consolidado, estos plazos han aumentado dada la mayor dedicación a préstamos de carácter hipotecario que, por naturaleza, son préstamos a medio o largo plazo. Igualmente se ha dudado de que las Cajas de Ahorros pudieran gestionar debidamente el empleo de los fondos procedentes de la reducción de circuitos privilegiados de crédito, afirmándose que se habían visto colocadas en la necesidad de aumentar sus depósitos en otros intermediarios financieros. La realidad, sin embargo, de las cifras muestra un descenso en este tipo de depósitos.

La conclusión básica del trabajo es, pues, la de que las Cajas, que siguen representando un tercio de nuestro sistema financiero, han sabido dar una respuesta adecuada al reto que les ha lanzado la economía española, pese al sustancial incremento de sus costes y que si se quiere conseguir lo que era objetivo de aquella reforma —la libertad entre los iguales— el proceso liberalizador debe ser acelerado sin entorpecimientos a fin de conseguir una auténtica situación de concurrencia de la que hoy nos hallamos muy distanciados.

El tercer artículo sobre las Cajas de Ahorros escrito por José M.^a García Alonso analiza detalladamente un tema polémico, cual es el de la expansión de las Cajas de Ahorros. «Papeles de Economía Española» ha querido ofrecer a sus lectores un esquema básico de las razones que la Administración ha manejado en la nueva regulación de esta materia y para ello ha solicitado la colaboración de quien, por razones profesionales, ha parecido más competente para explicar el porqué y los objetivos de la nueva regulación. Se espera aportar a nuestros lectores un

conjunto de informaciones y de ideas que les permita formar su propia opinión respecto de las ventajas y coste que el nuevo sistema de expansión de oficinas supone.

CLASE OBRERA Y ORDEN ECONOMICO

El trabajo del profesor Víctor Pérez Díaz, «Orden Social, Clase Obrera y Conciencia de Clase: Política y Economía» aborda un conjunto de cuestiones de importancia vital en el actual momento económico y político español. En el convencimiento de ese interés se ha destacado en la portada de este número de «Papeles». Y a ese trabajo desearíamos dedicar un comentario que subrayase a los lectores algunos de sus propósitos y conclusiones.

Digamos para empezar que es un trabajo que hay que leer despacio. No ofrece una caricatura improvisada de las actitudes de la clase obrera tantas veces realizada en trabajos de muy escasa utilidad. Es, por el contrario, un intento serio de conocer, interpretar y, en definitiva, tratar de entender la posición de la clase obrera, sus afirmaciones, sus negaciones y sus vacilaciones frente al **orden político** que definen los principios básicos de una democracia pluralista (afirmación de libertades públicas, existencia de pluralidad de partidos, competencia por el voto en elecciones periódicas) y frente al **orden económico** que establecen los principios de una economía mixta (economía social de mercado o capitalismo mixto).

El conocimiento de las actitudes de la clase obrera española, del que parte el trabajo de Víctor Pérez Díaz no es sólo el de su experiencia o el de su posible capacidad personal de observación de su entorno o el de suponer desde su mesa de trabajo una conducta hipotética de los trabajadores. Es un conocimiento diferente basado en una amplia encuesta en la que se consultan opiniones de 3.443 obreros industriales, 212 técnicos y 499 empleados del sector industrial: 4.154 encuestados en total. Encuesta cuidadosamente diseñada con el propósito de que fuera representativa de la población asalariada industrial, del peso de la industria en el territorio y de las opiniones de quienes trabajaban en la empresa pública y la privada.

Sobre este material, recopilado con arreglo a las más escrupulosas reglas metodológicas, discurre el trabajo de Víctor Pérez Díaz en un intento de presentarnos a la clase obrera que la muestra define (población ocupada dentro del sector industrial en los niveles de ejecución manual que requieren un grado relativamente bajo de cualificación profesional y un bajo nivel de responsabilidad), que cuantitativamente significa una cuarta parte de la población activa y que se ha considerado en todos los intentos de transformación socialista de la sociedad como centro de gravedad o referencia de sus movilizaciones («las bases», «las masas»).

Las preguntas que el trabajo de Víctor Pérez Díaz se hace frente a esta información pacientemente coleccionada no son evasivas, sino radicales: ¿Cuál es el modo de inserción de la clase obrera en el orden de una democracia pluralista y en el orden económico de un capitalismo mixto?

¿La clase obrera se comporta como integrada o antagonista al orden político, como aburguesada o radical en el orden económico? Las respuestas a estas preguntas de Víctor Pérez Díaz nos presentan una imagen viva de la clase obrera española. Una imagen que revela:

- Una actitud resuelta y muy clara en la aceptación del sistema político de una democracia pluralista por el que votó masivamente (referéndum de diciembre de 1976, a pesar de la reserva de los partidos de oposición democrática) y en el que participa ampliamente (alta participación obrera en las elecciones del 77: 85 por 100 y del 79: 75 por 100).
- Una actitud de cautelosa distancia hacia los partidos (dentro de una votación mayoritaria hacia los partidos de izquierda) respecto de los cuales está dispuesta a votar pero no está dispuesta a llegar a la afiliación (sólo una exigua minoría —el 6 por 100 de la clase obrera— tiene afiliación política) ni a entregarles su tiempo libre (sólo un 2,6 por 100 de los obreros ocupan parte de su tiempo libre con actividades políticas).
- Una actitud, en fin, de sano escepticismo respecto de las políticas defendidas por Gobierno y oposición en el momento de realizarse la encuesta (primavera del 78). La clase obrera no creía que en general la política del Gobierno fuera totalmente errónea, ni obedecía a intereses partidistas, ni representaba valores contrarios al sentimiento general, ni tampoco creían —en aquellas fechas— que la oposición representara una alternativa a la política del Gobierno.

Esos tres rasgos básicos de la imagen de la clase obrera que Víctor Pérez Díaz ofrece, se matizan con otras muchas afirmaciones sin cuya referencia y conocimiento es imposible conocer las actitudes de la clase obrera española de hoy.

Las actitudes de la clase obrera respecto al orden económico también se estudian por Víctor Pérez Díaz. La controversia sobre el orden económico ha ocupado un lugar preferente a lo largo de todo el proceso de transición política y de definición constitucional. De ahí el interés de contestar a la pregunta decisiva de si ¿se acepta o no por la clase obrera el sistema de economía social de mercado, economía mixta o capitalismo mixto? Las actitudes de la clase obrera, tal y como las presenta el cuidadoso análisis de Víctor Pérez Díaz son complejas y cualquier intento de simplificarlas sería quizás el principal error de su interpretación que hay que cortar.

Una atenta lectura del trabajo parecería autorizar el mantenimiento de siete conclusiones:

- 1.º No existe por parte de la clase obrera una abierta hostilidad hacia el orden económico existente capaz de suscitar acciones para su transformación radical.
- 2.º El orden económico existente necesita, sin embargo, de reformas que le hagan más aceptable a la clase obrera.
- 3.º Esas reformas tienen para la clase obrera tres claras finalidades:

conseguir una mayor libertad y autonomía de la población trabajadora, reducir la importancia y el peso en las decisiones de la minoría poderosa y conseguir una mayor igualdad.

- 4.º Las reformas necesarias para conseguir un orden económico justo deben obedecer a una estrategia gradual: el 80 por 100 de la clase obrera está convencida de que sólo a través de la acumulación de pequeñas reformas podrá llegarse a una sociedad mejor.
- 5.º Dentro del orden económico, la clase obrera opina que los Sindicatos deben desempeñar un papel importante. Dos tercios de la clase obrera ha votado a los sindicatos de «clase». Sin embargo, las actitudes obreras indican que de los Sindicatos se pide mayoritariamente atención a los intereses de los trabajadores y no tanto su participación política, que los temas que interesan prioritariamente a la clase trabajadora son: la seguridad en el empleo, los salarios y la asistencia sanitaria. Es también claro que la clase obrera desea una representación sindical en la que confíen y una proximidad de vida sindical y de empresa.
- 6.º La clase obrera se considera aceptablemente colocada en la sociedad española (el 82 por 100 de los obreros considera que en conjunto su posición es igual a la de la mayoría de los españoles), acepta, en general, su empleo en la empresa, y está satisfecha de su trabajo.
- 7.º Punto más controvertido es el de si la clase obrera considera a la empresa como comunidad moral y si admite, como legítima, la autoridad del empresario. Un 52 por 100 de los obreros está de acuerdo, en efecto, en que la empresa es una comunidad moral, pero hay un 44 por 100 que lo niega y afirma la existencia de una oposición fundamental entre empresarios y trabajadores. La figura del empresario se considera por un 70 por 100 de la clase obrera que desempeña un papel fundamental, pero un 59 por 100 opina que la autoridad del empresario sería mejor legitimarla por la elección de los trabajadores.

De nuevo es preciso insistir que esas afirmaciones esquemáticas no hacen justicia al trabajo de Víctor Pérez Díaz, porque su matización es muy importante para precisar la imagen de la clase obrera que ofrece en su trabajo. Remitir a la lectura atenta de su texto es así una obligación elemental de quien trata de glosarlo y ésta es una recomendación que hacemos convencidos de su fundamento y de su interés.

LA ECONOMIA ARAGONESA

Se ha indicado anteriormente que la tercera Sección de «Papeles» tendría como propósito el ir ofreciendo un conjunto de análisis de las economías de las distintas Comunidades Autónomas. Es evidente que hoy conocemos mal sus problemas y peor aún sus posibilidades de desarrollo. Consciente de esta situación el FIES ha promovido un conjunto de investigaciones que pretendemos interpreten quienes viven en cada una de estas Comunidades. La existencia ya de muchos especialistas e investi-

gadores que han trabajado sobre los problemas económicos de algunas de esas Comunidades nos ha permitido iniciar ya esta Sección. El estudio inicial que este número 2 de «Papeles» publica se refiere a la «Economía Aragonesa». Sus autores, Francisco Bono y Antonio Higuera, vienen trabajando, desde el servicio de estudios de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, en el tema y han elaborado, en colaboración con SADEI, las primeras tablas «input-output» y contabilidad regional de la Zona, ultimando en el momento actual una nueva tabla y contabilidad para 1978. Atendiendo a la solicitud de «Papeles de Economía Española» han escrito un trabajo en el que se pretenden ofrecer los rasgos básicos de la «Economía Aragonesa». El trabajo combina la descripción y el análisis de la población, sectores productivos y sus principales interdependencias, para concluir con un balance en el que se resumen los factores que condicionan el desarrollo de la economía aragonesa y se diseñan los puntos de acción estratégica para corregir los claros desequilibrios que presenta. Una relación bibliográfica comentada cierra el estudio que creemos inicia dignamente el propósito editorial de «Papeles» de facilitar el conocimiento de las distintas economías de las Comunidades Autónomas.

La colaboración especial que cierra este número 2 de «Papeles de Economía Española» es la del profesor Luis Angel Rojo sobre el tema «Keynes y los problemas de hoy». Decíamos en el primer número que era nuestro propósito presentar en esta última sección de la revista las opiniones e ideas de los maestros de la economía, cuya difusión considerásemos de especial interés. Y son las opiniones de un joven maestro de la economía las que hoy la ocupan. Creemos, sin exageración alguna, que la colaboración de Luis Angel Rojo cumple plenamente con estas condiciones. Está escrita con la prosa extraordinaria que caracteriza a sus trabajos y con un conocimiento y ponderación excepcionales que nuestros lectores sabrán sin duda apreciar.

Cinco son los grandes temas que el profesor Rojo analiza en su trabajo: el sentido en el que partes y elementos de la obra de Keynes, como la de otros grandes maestros de la Economía, conservan su validez; la evolución del libre, realista y flexible pensamiento de Keynes a lo largo de la depresión del 29; las diferencias sustanciales entre el mundo económico de Keynes y el nuestro y las anticipaciones keynesianas de nuestros problemas; los puntos en que el pensamiento keynesiano muestra más ostensiblemente su obsolescencia y, finalmente, los problemas de hoy vistos desde la perspectiva keynesiana y desde los desarrollos técnicos acumulados desde Keynes a nuestros días.

Esos cinco puntos constituyen tópicos sobre los que la literatura económica ha insistido en muchas ocasiones y, muy especialmente, en la mucha tinta empleada para conmemorar el cincuentenario reciente de la gran depresión del 29. El mérito principal del trabajo de Angel Rojo es hacerlo con originalidad y con una ejemplar economía de palabras llenas de útiles matices y de luminosas interpretaciones.

KEYNES Y LOS PROBLEMAS DE HOY

Su punto de partida y que inspira el contenido del trabajo, es elegir el sentido en el que debe verse a Keynes desde hoy. Decisión nada fácil, porque cincuenta años después, la figura de Keynes sigue dividiendo apasionadamente a los economistas. Una keynesiana tan destacada como Joan Robinson ha afirmado recientemente que «nadie debería tratar de defender a Keynes al pie de la letra o pretender la aplicación plena de su pensamiento a los problemas de nuestro tiempo», saliendo así al paso de los economistas que siguen contemplando la obra del gran economista británico como un texto completo y actual. El profesor Rojo insiste en este punto de vista. Keynes pertenece hoy al pasado, al igual que otros grandes pensadores económicos: Smith, Ricardo o Marx. El estudio de la obra de esos economistas del pasado sólo tienen sentido —afirma el profesor Rojo— para dilucidar «qué partes o elementos de su obra conservan validez a la luz de la evidencia disponible y en relación con los problemas actuales y qué parte ha perdido validez». Es desde esa perspectiva desde la que se contempla por Angel Rojo el contexto histórico de las obras de Smith, Ricardo, Marx y Keynes, y las conclusiones válidas hoy de sus análisis.

La evolución del pensamiento keynesiano desde los años veinte a los treinta y de la realidad económica se analizan por el profesor Rojo destacando la pérdida paulatina de la fe keynesiana en los ajustes característicos del mercado y en el mecanismo del «laissez-faire». Keynes no creía ya en 1934 en la recuperación natural y la acción saludable de la depresión, contrariando así claramente la tendencia dominante del pensamiento económico. Keynes, pese a su aislamiento, creía que era él y no la mayoría quien tenía la razón. Y esperaba y luchaba por el cambio de las opiniones ajenas. Es curiosa esta firme convicción de Keynes en el valor de sus ideas, incluso en fecha tan temprana como principios de 1935. Justamente el día de año nuevo Keynes escribía a Bernard Shaw: «Estoy terminando un libro de Teoría Económica que revolucionará profundamente —no de momento, sino en el transcurso de los próximos diez años— la forma en la que el mundo piensa acerca de los problemas económicos». La profecía fue cierta, pero el plazo largo, ya que la economía de guerra enseñaría al mundo, con sangre, sudor y lágrimas, el vigor de la demanda efectiva keynesiana para superar una depresión.

Pero los problemas de ayer no son los de hoy. No es insuficiencia de demanda efectiva y deflación lo que hoy padecemos. Los males vienen de otro frente: limitaciones de oferta e inflación aguda. Los problemas de hoy no estaban en los datos de las reflexiones de Keynes, pero, como el profesor Rojo prueba en la tercera parte de su trabajo, en Keynes hay aportaciones y anticipaciones críticas que explican problemas de hoy.

Las debilidades del pensamiento de Keynes —que Angel Rojo reseña en la cuarta parte de su estudio— residen en la inevitable obsolescencia de parte de sus ideas impuesta por el cambio de circunstancias históricas. Cuatro son, para el profesor Rojo, los aspectos en que las ideas keynesianas muestran su envejecimiento ostensible (el acento sobre el

corto plazo, el análisis montado sólo sobre la agregación, la confianza excesiva en las posibilidades y en la validez de la manipulación de la demanda efectiva, la despreocupación por el déficit del sector público y sus consecuencias sobre el uso eficaz de los recursos).

En la quinta y última parte de su trabajo, el profesor Rojo trata, con ayuda de Keynes y los desarrollos posteriores, de iluminar los problemas de hoy. Constituye una sección llena de aciertos sobre la que llamamos la atención de nuestros lectores. El acento que Angel Rojo pone sobre la libertad con la que los economistas deben analizar los hechos sin aferrarse a tradiciones ni concepciones previas —el gran mensaje que transmite la conducta del propio Keynes— obliga a atender hoy a problemas diferentes a los del pasado. Los problemas de la oferta son nuestros principales problemas con sus efectos simultáneos de inflación y estancamiento. El tema central de la escasez de energía con su freno al crecimiento, tiene, según afirma con acierto el profesor Rojo, una analogía útil con el tema dominante en la economía ricardiana de la escasez persistente de un recurso natural. La teoría de las transferencias debe iluminar las propuestas para resolver un problema actual tan grave como lo es el empobrecimiento acumulativo derivado de los precios del petróleo para los países importadores. La teoría macroeconómica nos indica las secuencias de la inflación actual y nos previene de las dificultades de estimular la demanda sin agudizar su crecimiento. La asignación correcta de recursos bajo la disciplina enérgica del mercado adquiere la máxima prioridad en un mundo de costes y precios relativos dislocados que reclaman cambios decisivos en el empleo de los recursos. Todas estas fuerzas del Análisis Económico nos indican cómo orientar el quehacer de los economistas en un mundo que Keynes no conoció y que es el nuestro. Un mundo difícil de administrar, porque en él se han abierto campos de escasez dramática de recursos que reclaman volúmenes ingentes de inversión que habrán de financiarse con detracciones mayores de ahorro del modesto crecimiento de la renta, reduciendo el consumo a una población que había hecho de las expectativas crecientes en su nivel de vida su primera y más decisiva exigencia.

Los ecos de estas afirmaciones del profesor Rojo sobre la realidad económica española se perciben claramente y el lector sabrá escucharlos al ir avanzando en sus páginas llenas de sugerencias y de interés.

Esta introducción editorial quiere terminar volviendo a su principio. Una revista vale lo que valgan sus lectores. Al reiterar el agradecimiento por la fiel y generosa demanda de quien ha pedido leer nuestros «Papeles» quisieramos que no nos faltasen ni sus observaciones, ni sus críticas, ni sus colaboraciones. Hemos trabajado en este número 2 con ese propósito final. Y ahora esperamos las respuestas de nuestros lectores.

**A LA ESPERA DE
LOS LECTORES**